



**GUADALAJARA, JALISCO, 18 DIECIOCHO DE JUNIO DEL AÑO  
2021 DOS MIL VEINTIUNO.**

**V I S T O** para resolver en sentencia definitiva el Juicio Administrativo radicado con número de expediente anotado rubro, promovido por [REDACTED] en contra de la **SECRETARÍA DEL TRANSPORTE, SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA y DIRECCIÓN DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DE ZAPOPAN, TODAS DEL ESTADO DE JALISCO.**

### **R E S U L T A N D O**

1.- Mediante escrito presentado ante la Oficialía de Partes Común de este Tribunal el día 26 veintiséis de febrero del año 2020 dos mil veinte, [REDACTED], por su propio derecho, promovió juicio administrativo, atento a los motivos y consideraciones legales que del mismo se desprenden.

2.- En proveído de fecha 5 cinco de marzo del año 2020 dos mil veinte, se admitió la demanda de referencia, teniéndose como Autoridades demandadas a las ya citadas, y como actos administrativos impugnados, los señalados en el escrito inicial de demanda, consistentes en:

- Cédulas de Notificación de Infracción folios 229507010 y 284332751, de la Secretaría del Transporte;
- Cédula de Notificación de Infracción folio 35518, de la Dirección de Movilidad y Transporte de Zapopan, Jalisco;
- Actualización, recargos, multas y gastos de ejecución derivados del pago de refrendo anual de placas vehiculares de los años 2018 dos mil dieciocho y 2019 dos mil diecinueve, así como requerimientos con números de folio M606004069598 y M617004128143, de la Secretaría de la Hacienda Pública.

De igual forma, se admitieron las pruebas ofrecidas que se encontraron ajustadas a derecho, teniéndose por desahogadas aquellas que su naturaleza lo permitió, requiriendo a las demandadas por los actos reclamados. De lo anterior, se ordenó correr traslado a las autoridades con las copias simples de la demanda inicial y documentos anexos, apercibidas que de no producir contestación en un término de 10 diez días se tendrían por ciertos los hechos que no fueran contestados, salvo que, por las pruebas rendidas o por hechos notorios, resulten desvirtuados.

3.- Por acuerdo de fecha 14 catorce de octubre del año 2020 dos mil veinte, se tuvo a las autoridades produciendo contestación a la demanda, oponiendo excepciones y defensas; de igual forma, se admitieron las pruebas ofrecidas, desahogándose aquellas que su naturaleza lo permitió y, toda vez que no acompañaron los actos requeridos previamente, se hizo efectivo el apercibimiento, teniéndose por ciertos los hechos que se pretendían acreditar con



dichas probanzas. De lo anterior, se ordenó correr traslado a la parte actora para que ampliara su demanda.

4.- En actuación del 2 dos de febrero del año 2021 dos mil veintiuno, se tuvo a la actora ampliando su demanda, de lo que se ordenó correr traslado a su contraria para que produjera contestación, lo cual realizó, por lo que el día 15 quince de junio siguiente, al no quedar pruebas pendientes por desahogar, se ordenó poner los autos a la vista de las partes para que dentro del término de 3 tres días formularan por escrito sus alegatos, surtiendo efectos de citación para el dictado de la sentencia definitiva correspondiente.

### C O N S I D E R A N D O

I.- Esta Segunda Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, resulta competente para conocer y resolver la presente controversia con fundamento en lo dispuesto por el artículo 65 párrafo primero de la Constitución Política del Estado de Jalisco, así como los numerales 4 y 10 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de la Entidad, y los arábigos 1º, 4, 72, 73 y 74 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Jalisco.

II.- La existencia de los actos administrativos impugnados se encuentran acreditados con las constancias que obran a fojas 7 siete, 35 treinta y cinco y 41 cuarenta y uno del Expediente en que se actúa, mismas que merecen valor probatorio pleno de conformidad a lo establecido en los artículos 329, fracciones II y VI y 399 del Código de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Justicia Administrativa, ambos ordenamientos del Estado de Jalisco, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 58 de este último ordenamiento legal.

III.- Toda vez que no se hacen valer causales de improcedencia, y al no advertir de oficio la actualización de alguna, procede analizar la litis planteada por las partes, para lo cual, atento a lo dispuesto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Contradicción de Tesis 50/2010, donde prevaleció la Jurisprudencia 2ª./J. 58/2010, visible en la página 830 ochocientos treinta, Tomo XXXI, mayo de 2010 dos mil diez, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, los conceptos expresados por las partes no se transcriben de manera literal, al estimar que con ello no se causa perjuicio a quienes intervienen en el juicio; no obstante, se precisará en la presente resolución los puntos sujetos a debate derivados de la demanda, contestación y en su caso, la respectiva ampliación, a saber:

***“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios***



*de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer.*

*Contradicción de tesis 50/2010. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo del Noveno Circuito, Primero en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito y Segundo en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito. 21 de abril de 2010. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Arnulfo Moreno Flores. Tesis de jurisprudencia 58/2010. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del doce de mayo de dos mil diez."*

**IV.-** Primeramente, en lo que respecta a las Cédulas de Notificación de Infracción emitidas por la Secretaria del Transporte del Estado de Jalisco, tomando en cuenta la manifestación de allanamiento por parte de la misma, respecto de la pretensión del accionante, se estima innecesario entrar al estudio de la Litis planteada acorde a lo dispuesto por el ordinal 42 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, mismo que para una mayor convicción se transcribe:

*"...Artículo 42. Admitida la demanda en definitiva se correrá traslado de ella al demandado, emplazándolo para que la conteste dentro del término de diez días. El plazo para contestar la ampliación de la demanda también será de diez días siguientes a aquel en que surta efectos la notificación del acuerdo que la admita. Si no se produce la contestación en tiempo, o ésta no se refiere a todos los hechos, se tendrán como ciertos los que no hubieren sido contestados, salvo que, por las pruebas rendidas o por hechos notorios, resulten desvirtuados.*

*(...)*

*En la contestación de la demanda y hasta antes del cierre de la instrucción, el demandado podrá allanarse a las pretensiones del demandante si se tratare de la autoridad, el magistrado podrá ordenar de inmediato la revocación del acto origen de la demanda o la expedición del acto que subsane la omisión, según sea el caso..."*

Determinado lo anterior, este Juzgador declara procedente la pretensión del actor, toda vez que las enjuiciadas se allanaron a la misma, lo que implica su conformidad con lo pretendido y a la vez su renuncia expresa a su derecho de defensa, en consecuencia, se revocan los actos impugnados consistentes en las Cédulas de Notificación de Infracción con números de folio 229507010 y 284332751, emitidas por la Secretaría del Transporte del Estado de Jalisco.



En consecuencia, al acreditar la ilegalidad de los actos reclamados, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del numeral 74, en relación con el diverso artículo 75, fracción II, ambos de la Ley de Justicia Administrativa del Estado, se declara la nulidad de los Requerimientos con números de folio M606004069598 y M617004128143, emitidos por la Secretaría de la Hacienda Pública, al tener su origen en actos que han sido declarados nulos y, por tanto, no pueden surtir efecto legal alguno, atento a lo establecido en la Jurisprudencia publicada con número de registro 252103, página 280 doscientos ochenta, Volumen 121-126, Sexta Parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que reza:

*“ACTOS VICIADOS, FRUTOS DE. Si un acto o diligencia de la autoridad está viciado y resulta inconstitucional, todos los actos derivados de él, o que se apoyen en él, o que en alguna forma estén condicionados por él, resultan también inconstitucionales por su origen, y los tribunales no deben darles valor legal, ya que de hacerlo, por una parte alentarían prácticas viciosas, cuyos frutos serían aprovechables por quienes las realizan y, por otra parte, los tribunales se harían en alguna forma partícipes de tal conducta irregular, al otorgar a tales actos valor legal. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.”*

V.- Por lo que ve a la diversa Cédula de Notificación de Infracción folio 35518, de la autoridad municipal, que se impugna, atento a lo dispuesto por el numeral 72 de la Ley de la Materia, se analizan en primer término las causas de anulación que lleven a declarar la nulidad lisa y llana del acto reclamado, para lo cual, la parte actora alega en ampliación de demanda que *el acto reclamado no se encuentra debidamente fundado y motivado, debiendo declarar su nulidad lisa y llana.*

Visto lo argumentado por las partes, se determina que le asiste la razón a la accionante, atento a los siguientes razonamientos legales.

Del contenido en que se encuentra inmerso el acto reclamado, no se desprende que la autoridad demandada haga una vinculación de la conducta del infractor con la legislación violada, lo que genera un vicio de fondo que impide a la autoridad su reiteración; sin embargo, este no puede apreciarse aisladamente, sino que, como parte del orden jurídico que conforma, debe interpretarse armónicamente, en atención al principio de unidad de los actos administrativos impugnados, de los cuales se advierte que de ninguna manera cumple con la formalidad a que alude el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece lo siguiente:

*“Artículo 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. (...)”*

Al respecto, el citado dispositivo establece de manera imperativa que todo acto de autoridad sea emitido cumpliendo con tal exigencia, es decir que funde y motive la causa legal del procedimiento, lo anterior encuentra sustentado en la





Tesis XXI. 1o. 90 K, localizable en la página 334 trescientos treinta y cuatro, Tomo XIV, septiembre de 1994 mil novecientos noventa y cuatro, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que reza:

**“FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. VIOLACION FORMAL Y MATERIAL.** Cuando el artículo 16 constitucional establece la obligación para las autoridades de fundar y motivar sus actos, dicha obligación se satisface, desde el punto de vista formal, **cuando se expresan las normas legales aplicables, y los hechos que hacen que el caso encaje en las hipótesis normativas.** Pero para ello basta que quede claro el razonamiento substancial al respecto, sin que pueda exigirse formalmente mayor amplitud o abundancia que la expresión de lo estrictamente necesario para que substancialmente se comprenda el argumento expresado. Sólo la omisión total de motivación, o la que sea tan imprecisa que no dé elementos al afectado para defender sus derechos o impugnar el razonamiento aducido por las autoridades, podrá motivar la concesión del amparo por falta formal de motivación y fundamentación. Pero satisfechos estos requisitos en forma tal que el afectado conozca la esencia de los argumentos legales y de hecho en que se apoyó la autoridad, **de manera que quede plenamente capacitado para rendir prueba en contrario de los hechos aducidos por la autoridad, y para alegar en contra de su argumentación jurídica,** podrá concederse, o no, el amparo, por incorrecta fundamentación y motivación desde el punto de vista material o de contenido, pero no por violación formal de la garantía de que se trata, ya que ésta comprende ambos aspectos.”

De lo anterior se infiere que, para que un acto administrativo se considere debidamente fundado y motivado, máxime en tratándose de uno emitido de manera unilateral y que cause agravio a un perjudicado, como el que nos ocupa, debe reunir ciertos elementos de validez, entre los cuales se encuentra precisamente, el contener una debida fundamentación y motivación por parte de la autoridad que lo emite, siendo ésta la única forma en que el acto de molestia proporcione seguridad jurídica al gobernado para todos los efectos legales conducentes, incluso los inherentes a la responsabilidad de la misma.

Por lo que resulta fundado el alegato relativo a la indebida fundamentación y motivación de la infracción en cuestión, a virtud que, si bien se estableció únicamente lo siguiente: **“MOTIVO DE LA INFRACCIÓN Consultar el numeral de infracción al reverso y los motivos de la sanción”;** de lo anterior, no se advierten las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tomado en cuenta para llegar a esa conclusión, es decir, no se señaló cómo es que se cercioró que el supuesto infractor se encontraba en las hipótesis normativas, así como las **circunstancias de modo tiempo y lugar, aunado a que cita dispositivos sin señalar con precisión a que legislación se refiere, máxime que no existe adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables para cumplir con la exigencia constitucional de fundamentar y motivar debidamente los actos de autoridad,** por lo que se **declara la nulidad lisa y llana** del acto administrativo impugnado. A lo anterior cobran aplicación por las razones que sustenta, la Jurisprudencia visible en la página 43 cuarenta y tres, del tomo 64 sesenta y cuatro, abril de 1993 mil



novecientos noventa y tres, Octava Época, así como la Jurisprudencia consultable en la página 1964 mil novecientos sesenta y cuatro, Tomo XXVII, febrero de 2008 dos mil ocho, Novena Época, publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que respectivamente disponen:

**“FUNDAMENTACION Y MOTIVACION DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS.** De acuerdo con el artículo 16 constitucional, todo acto de autoridad debe estar suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y por lo segundo, que también deben señalarse con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, siendo necesario además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configure la hipótesis normativa. Esto es, que cuando el precepto en comento previene que nadie puede ser molestado en su persona, propiedades o derechos sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento, está exigiendo a todas las autoridades que apeguen sus actos a la ley, expresando de que ley se trata y los preceptos de ella que sirvan de apoyo al mandamiento relativo. en materia administrativa, específicamente, para poder considerar un acto autoritario como correctamente fundado, es necesario que en él se citen: a).- los cuerpos legales y preceptos que se estén aplicando al caso concreto, es decir, los supuestos normativos en que se encuadra la conducta del gobernado para que esté obligado al pago, que serán señalados con toda exactitud, precisándose los incisos, subincisos, fracciones y preceptos aplicables, y b).- los cuerpos legales, y preceptos que otorgan competencia o facultades a las autoridades para emitir el acto en agravio del gobernado.”

**“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. LA DIFERENCIA ENTRE LA FALTA Y LA INDEBIDA SATISFACCIÓN DE AMBOS REQUISITOS CONSTITUCIONALES TRASCIENDE AL ORDEN EN QUE DEBEN ESTUDIARSE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN Y A LOS EFECTOS DEL FALLO PROTECTOR.** La falta de fundamentación y motivación es una violación formal diversa a la indebida o incorrecta fundamentación y motivación, que es una violación material o de fondo, siendo distintos los efectos que genera la existencia de una u otra, por lo que el estudio de aquella omisión debe hacerse de manera previa. En efecto, el artículo 16 constitucional establece, en su primer párrafo, el imperativo para las autoridades de fundar y motivar sus actos que incidan en la esfera de los gobernados, pero la contravención al mandato constitucional que exige la expresión de ambas en los actos de autoridad puede revestir dos formas distintas, a saber: la derivada de su falta, y la correspondiente a su incorrección. Se produce la falta de fundamentación y motivación, cuando se omite expresar el dispositivo legal aplicable al asunto y las razones que se hayan considerado para estimar que el caso puede subsumirse en la hipótesis prevista en esa norma jurídica. En cambio, hay una indebida fundamentación cuando en el acto de autoridad sí se invoca el precepto legal, sin embargo, resulta inaplicable al asunto por las características específicas de éste que impiden su adecuación o encuadre en la hipótesis normativa; y una incorrecta motivación, en el supuesto en que sí se indican las razones que tiene en consideración la autoridad para emitir el acto, pero aquéllas están en disonancia con el contenido de la norma legal que se aplica en el caso. De manera que la falta de fundamentación y motivación significa la carencia o ausencia de tales requisitos, mientras que la indebida o incorrecta fundamentación y motivación entraña la presencia de ambos requisitos constitucionales, pero con un desajuste entre la aplicación de normas y los razonamientos formulados por la autoridad con el caso concreto. La diferencia



*apuntada permite advertir que en el primer supuesto se trata de una violación formal dado que el acto de autoridad carece de elementos insitos, connaturales, al mismo por virtud de un imperativo constitucional, por lo que, advertida su ausencia mediante la simple lectura del acto reclamado, procederá conceder el amparo solicitado; y en el segundo caso consiste en una violación material o de fondo porque se ha cumplido con la forma mediante la expresión de fundamentos y motivos, pero unos y otros son incorrectos, lo cual, por regla general, también dará lugar a un fallo protector, sin embargo, será menester un previo análisis del contenido del asunto para llegar a concluir la mencionada incorrección. Por virtud de esa nota distintiva, los efectos de la concesión del amparo, tratándose de una resolución jurisdiccional, son igualmente diversos en uno y otro caso, pues aunque existe un elemento común, o sea, que la autoridad deje insubsistente el acto inconstitucional, en el primer supuesto será para que subsane la irregularidad expresando la fundamentación y motivación antes ausente, y en el segundo para que aporte fundamentos y motivos diferentes a los que formuló previamente. La apuntada diferencia trasciende, igualmente, al orden en que se deberán estudiar los argumentos que hagan valer los quejosos, ya que si en un caso se advierte la carencia de los requisitos constitucionales de que se trata, es decir, una violación formal, se concederá el amparo para los efectos indicados, con exclusión del análisis de los motivos de disenso que, concurriendo con los atinentes al defecto, versen sobre la incorrección de ambos elementos inherentes al acto de autoridad; empero, si han sido satisfechos aquéllos, será factible el estudio de la indebida fundamentación y motivación, esto es, de la violación material o de fondo.”*

**VI.-** Por otro lado, respecto a la actualización y recargos derivados del Refrendo Anual de Placas Vehiculares de los años 2018 dos mil dieciocho y 2019 dos mil diecinueve, emitidos por la Secretaría de Hacienda Pública del Estado de Jalisco, la parte actora argumenta en ampliación de demanda que *el acto reclamado no fue legalmente notificado, que no consta por escrito y no se encuentran debidamente fundados y motivados, contraviniendo lo dispuesto por el Código Fiscal del Estado.*

Al respecto, resulta infundado lo argumentado por la accionante, toda vez que, la obligación del pago del Derecho de Refrendo se encuentra previsto en el artículo 31 fracción IV de la Constitución Federal al señalar éste, la obligación fiscal que tiene de contribuir para los gastos públicos, del Estado y Municipio en que reside, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes y en las normas auto-aplicativas, contenidas en los artículos 70 fracción II, de la Ley de Hacienda del Estado de Jalisco y 23, fracción III de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, para los ejercicios fiscales de los años 2018 dos mil dieciocho y 2019 dos mil diecinueve.

En esa misma tesitura, toda vez que lo que reclama, por una parte, son los recargos y actualizaciones, tomando en consideración que los mismos son generados por el simple transcurso del tiempo ante la omisión puntual del pago de impuestos o derechos y los que, a diferencia de las multas y contrario a lo aducido por la actora, no tienen vida jurídica independiente del pago de refrendo anual de placas vehiculares que les da origen, por lo que no es necesaria la existencia de la emisión de un acto administrativo emitido por la autoridad fiscal, al resultar un derecho contenido en una norma autoaplicativa prevista en la Ley de Hacienda del Estado y la correspondiente Ley de Ingresos, de ahí, que el origen



de actualizaciones y recargos se encuentran condicionados a la existencia de un crédito insatisfecho a cargo del contribuyente y no a la notificación de éste, de conformidad con lo dispuesto por el arábigo 71 del Código Fiscal del Estado, que dispone:

*“Artículo 71. Cuando no se pague un crédito fiscal en la fecha, o dentro del plazo fijado por las leyes fiscales, el monto del mismo se actualizará desde el mes que debió hacerse el pago y hasta que el mismo se efectúe, de conformidad con el artículo 68 de este Código. Además, deberán pagarse recargos por concepto de indemnización al fisco estatal por la falta de pago oportuno; dichos recargos se calcularán aplicando al monto de dicho crédito actualizado por el período a que se refiere este párrafo, la tasa establecida en la Ley de Ingresos del Estado por concepto de intereses, incrementada en un 50%.*

*Los recargos se causarán hasta por cinco años y se calcularán sobre el total del crédito fiscal, excluyendo los propios recargos, la indemnización por cheques devueltos a que se refiere el párrafo cuarto del artículo siguiente, los gastos de ejecución y las multas por infracciones a las leyes fiscales.*

*Cuando el pago hubiese sido menor al que corresponda, los recargos se computarán sobre la diferencia.*

*Los recargos se causarán a partir del día en que debió hacerse el pago y hasta que el mismo se efectúe, cuantificándose únicamente por el período transcurrido.*

*Cuando los recargos determinados por el contribuyente sean inferiores a los que calcule la Oficina de Recaudación Fiscal, ésta deberá aceptar el pago y procederá a exigir el remanente.*

*Cuando el contribuyente pague en forma espontánea y en una sola exhibición el total del crédito fiscal omitido, el importe de los recargos no excederá del 100% por ciento del crédito fiscal.*

*No se causarán recargos, cuando el contribuyente al pagar créditos fiscales en forma extemporánea, compense un saldo a su favor, hasta por el monto de dicho saldo, siempre que este se hubiera originado con anterioridad a la fecha en que debieron pagarse los impuestos, derechos, productos o aprovechamientos de que se trate.*

*Cuando el saldo a favor del contribuyente se hubiera originado con posterioridad a la fecha en que se causaron los impuestos, derechos, productos o aprovechamientos, sólo se causarán recargos por el período comprendido entre la fecha en que debieron pagarse éstos y la fecha en que se originó el saldo a compensar.”*

De lo anterior, se concluye que los recargos y actualizaciones no se encuentran sujetas a la notificación del crédito fiscal adeudado, o de algún acto administrativo por escrito, fundado y motivado, sino que se calculan desde el momento en que debió realizarse el pago y hasta la fecha en que se efectúe el mismo; de ahí, que se confirme la validez de los recargos y actualizaciones del crédito fiscal que no fue combatido en el presente juicio.





En tal tesitura, al no exponer diverso concepto de impugnación en contra del acto administrativo en estudio, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción II de la Ley de Justicia Administrativa del Estado, **se reconoce la validez del crédito fiscal por concepto recargos y actualizaciones del Refrendo Anual de Placas Vehiculares del año 2019 dos mil diecinueve**, al no desvirtuar su validez.

No obstante, por cuanto al Requerimiento con número de folio M418004126178, correspondiente al crédito fiscal 18004381449, emitido por la Secretaría de la Hacienda Pública, que contiene la multa y gastos de ejecución derivado de la falta de pago oportuno del Refrendo Anual de Placas Vehiculares del año 2018 dos mil dieciocho, el actor alega en ampliación de demanda que *no se realizó la notificación personalmente, y conforme a las disposiciones legales aplicables.*

Visto lo argumentado por el demandante, así como los actos administrativos impugnados visibles a fojas 35 treinta y cinco a 37 treinta y siete del Sumario, se determina que le asiste la razón, toda vez que los actos reclamados no cumplen con las formalidades establecidas en el Código Fiscal del Estado, para los Requerimientos y sus notificaciones, a virtud que no se realizó en forma personal, atento a lo dispuesto por el numeral 96 del citado cuerpo de leyes, a saber:

*“Artículo 96.- Las notificaciones personales se harán en el domicilio de la persona, a quien se deba notificar, y que haya señalado ante las autoridades fiscales, en el procedimiento administrativo de que se trate, a falta de señalamiento, se estará a las reglas del artículo 47 de este código. Dichas notificaciones podrán practicarse en las oficinas de las autoridades fiscales, si las personas a quienes deba notificarse se presentan, por cualquier circunstancia en ellas, o en el lugar en que se encuentren, previa identificación.*

*Se entenderán con la persona que debe ser notificada o su representante legal; a falta de ambos, el notificador, cerciorado de que sea el domicilio fiscal, dejará citatorio con cualquier persona que se encuentre en el domicilio, para que se le espere, a una hora fija del día siguiente. Si el domicilio se encontrare cerrado, el citatorio se dejará con el vecino más próximo.*

*Si la persona a quien haya de notificarse no atendiere el citatorio, la notificación se le hará por conducto de cualquier persona que se encuentre en el domicilio en que se realice la diligencia, cerciorado nuevamente el notificador de lo establecido en el párrafo anterior y de negarse éste a recibirla se realizará por instructivo que se fijará en la puerta del domicilio.*

*En el momento de la notificación se entregará al notificado o a la persona con quien se entienda la diligencia, copia del documento a que se refiere la notificación.*

*De las diligencias en que conste la notificación o cita, el notificador levantará acta circunstanciada por escrito.*

*Si las notificaciones se refieren a requerimientos para el cumplimiento de obligaciones no satisfechas dentro de los plazos legales, se causarán gastos de ejecución, a cargo de quien incurrió en el incumplimiento de la obligación.”*



En esa tesitura, del Acta de Notificación y citatorio, no se advierte que fuera notificado en forma personal al actor, su representante o a cualquier persona que pudiera hacerle llegar el mismo, a efecto que estuviera en oportunidad de atender la diligencia, así como tampoco precisa las razones por las cuales no se pudo dejar con el vecino más próximo, en caso de no haber nadie en el domicilio.

En tal circunstancia, lo procedente es, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 74, fracción II y 75, fracción II de la Ley de Justicia Administrativa del Estado, **declarar la nulidad** de los actos administrativos reclamados consistentes en la multa y gastos de ejecución contenidos en el Requerimiento con número de folio M418004126178, correspondiente al crédito fiscal 18004381449, emitido por la Secretaría de la Hacienda Pública, al lograr desvirtuar la presunción de legalidad que goza.

En razón de lo anterior, tomando en consideración que el demandante acredita haber realizado el pago de los folios declarados nulos, se ordena a la Secretaría de Hacienda Pública del Estado de Jalisco, la devolución de la diferencia de la cantidad enterada por dichos conceptos, mediante Recibos Oficiales A47734594 y A47734595, ambos de fecha 30 treinta de enero del año 2020 dos mil veinte, por el total de \$3,830.00 tres mil ochocientos treinta pesos, moneda nacional, una vez descontado el pago del refrendo anual de placas vehiculares de los años 2018 dos mil dieciocho a 2020 dos mil veinte, así como actualizaciones y recargos y del concepto denominado "*MONTO PARA LA CRUZ ROJA MEXICANA Y HOGAR CABAÑAS...*" que no fue materia de la presente litis.

Por todo lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 42, 72, 73, 74 fracción II y 75, fracción II de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, se resuelve a través de los siguientes:

## R E S O L U T I V O S

**PRIMERO.-** Se revocan los actos impugnados consistentes en las Cédulas de Notificación de Infracción con números de folio 229507010 y 284332751, emitidas por la Secretaria del Transporte del Estado de Jalisco, por allanamiento del Secretario del Transporte del Estado, a las pretensiones de la parte actora, como se establece en el Considerando IV del presente fallo.

**SEGUNDO.-** La parte actora acreditó parcialmente los elementos constitutivos de su acción, en tanto que las autoridades demandadas justificaron parcialmente sus excepciones y defensas, en consecuencia;

**TERCERO.-** Se declara la nulidad lisa y llana de Cédula de Notificación de Infracción folio 35518, de la Dirección de Movilidad y Transporte de Zapopan, Jalisco, además de la multa y gastos de ejecución contenidos en el Requerimiento



con número de folio M418004126178, correspondiente al crédito fiscal 18004381449 derivado de la falta de pago oportuno del Refrendo Anual de Placas Vehiculares del año 2018 dos mil dieciocho, y de los diversos requerimientos con números de folio M606004069598 y M617004128143, emitidos por la Secretaría de la Hacienda Pública, al dictarse en contravención a las disposiciones legales aplicables, atento a los motivos y fundamentos expuestos en los Considerandos V y VI de la presente resolución.

**CUARTO.-** Se ordena a la Secretaría de la Hacienda Pública la devolución de la diferencia de la cantidad enterada por concepto de los actos nulificados, mediante Recibos Oficiales A47734594 y A47734595, ambos de fecha 30 treinta de enero del año 2020 dos mil veinte, por el total de \$3,830.00 tres mil ochocientos treinta pesos, moneda nacional, atento a los motivos y fundamentos legales expuestos en el último Considerando de la presente resolución.

**QUINTO.-** Se reconoce la validez de las actualizaciones y recargos derivados del Refrendo Anual de Placas Vehiculares respecto al ejercicio fiscal de los años 2018 dos mil dieciocho y 2019 dos mil diecinueve, al no desvirtuar la presunción de validez que gozan, atento a lo dispuesto en el último Considerando de la presente sentencia.

En virtud de que la presente sentencia se dicta dentro del término de Ley con fundamento en lo establecido en el numeral 72 de la Ley de Justicia Administrativa, con la publicación que de ésta se haga en el Boletín Electrónico de éste Órgano Jurisdiccional publicado en la página electrónica [www.tjajal.org](http://www.tjajal.org) con fundamento en los artículos 12 y 13 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, quedan debida y legalmente enteradas las partes del presente juicio.

### **NOTIFÍQUESE POR BOLETÍN ELECTRÓNICO.**

Así lo resolvió y firma el Presidente de la Segunda Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, Magistrado Laurentino López Villaseñor, actuando ante la Secretario Patricia Ontiveros Cortés, que autoriza y da fe. -----

**MAGISTRADO PRESIDENTE**

**LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR**

**SECRETARIO**



## PATRICIA ONTIVEROS CORTÉS

LLV/POC/mavc

La Segunda Sala, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 20 y 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus municipios; 3 fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco; Cuadragésimo Octavo, Cuadragésimo Noveno y Quincuagésimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación de Información Pública, que deberán de observar los Sujetos Obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco; Décimo Quinto, Décimo Sexto y Décimo Séptimo de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los Sujetos Obligados previsto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus municipios; indica que fueron suprimidos de la versión pública de la presente sentencia (nombre del actor, representante legal, domicilio de la parte actora, etc.), información considerada legalmente como confidencial, por actualizar lo señalado en dichos supuestos normativos.- - - - -